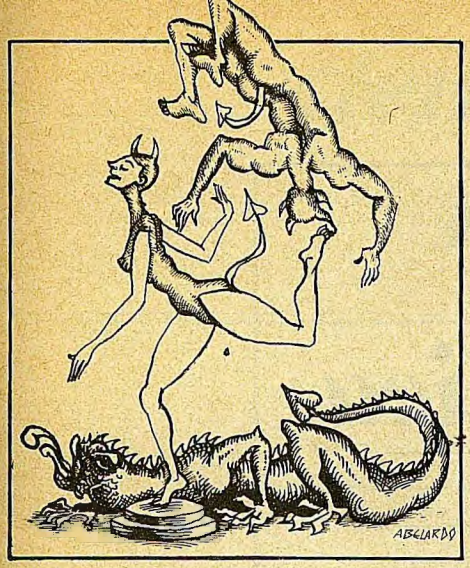

sus notas de protesta, por impertinentes. La salida de Cummins la había sugerido Carranza y la había pedido extraoficialmente Obregón, pero sin resultado. Como la Foreign Office dejara pasar los diez días que Obregón dio de plazo para que el Encargado de Archivo abandonara el país por su propia voluntad, su gobierno debió de forzar la salida sitando la legación, lo que fue considerado como una ofensa intolerable por los británicos. Un mes y medio después de la expulsión de Cummins, el panorama anglo-mexicano se ensombreció aún más, pues a principios de agosto de 1924 un súbdito británico, la señora Rosalie Evans —propietaria de una hacienda en Puebla, y desde tiempo atrás en conflicto abierto con los agraristas locales que demandaban la expropiación de una buena parte de las tierras de la hacienda de San Pedro— fue asesinada por los agraristas. La señora Evans era una viuda de un súbdito británico, que pistola en mano se había enfrentado varias veces y desde hacía tiempo a los agraristas. Se trataba de una persona de pluma fácil y cuyas cartas habían sido publicadas por la prensa internacional, y que por tanto, era célebre antes de su asesinato. Su muerte fue reportada en los grandes diarios mundiales, y presentada como simbólica de la naturaleza de la actitud del nuevo régimen mexicano hacia los extranjeros. La Evans fue vista como una mujer sola, que defendía con las armas y la ley sus legítimos derechos contra ordas de nativos ignorantes y cobardes, deseosos de apropiarse de lo que no era suyo. Para la prensa de habla inglesa, la Evans había sido víctima de la injusticia de un gobierno que se negó a defenderla y alentó a sus atacantes. Sólo el caso Benton igualó al de la Evans en llevar al público angloamericano una imagen extraordinariamente negativa de la relación de México con los extranjeros: por un lado el extranjero trabajador, que con su esfuerzo había hecho de una tierra sin valor algo productivo, y del otro lado, la Revolución que, con sus fáciles y falsas promesas de justicia social, daba aliento a un populacho que despojaba y asesinaba a esos extranjeros indefensos.

La tormenta en torno al "caso Evans" finalmente amainó, y Obregón dejó la banda presidencial en el pecho del general Calles. El realismo, por fin, tuvo oportunidad de hacerse presente en la Foreign Office, que a partir de diciembre de 1924 ya no tuvo que tratar con Obregón y toda la carga simbólica que ello implicaba. Por otra parte, el gobierno mexicano inició un juicio en contra de varios individuos acusados de haber dado muerte a la señora Evans, con lo que cubrió su responsabilidad formal. Así pues, 1925 era un buen momento para concluir la tantas veces pospuesta negociación con México y su régimen revolucionario. Para Calles, el incentivo de lograr una reconciliación formal con los británicos, aumentó en la medida en que la relación con Estados Unidos volvió a deteriorarse a lo largo de 1925, a raíz del empeño presidencial en pasar una ley petrolera que diera contenido al artículo 27 constitucional. Era obvio que ni en la mejor de las situaciones el apoyo británico podría neutralizar las presiones de Estados Unidos, pero al menos no dañaría, y quizá podría constituir un elemento de mediación entre México y su vecino del norte.

A través de la persona de Frederick Adams, los empresarios británicos fueron los primeros en reiniciar la negociación anglo-mexicana. Se delinearon entonces —de manera extraoficial— los contenidos del acuerdo sobre reclamaciones que podría firmarse inmediatamente después de haber intercambiado ministros. Sin embargo, la comunicación se cortó cuando se trató de afinar estos puntos de acuerdo. Por eso, a mediados de 1925, los profesionales, es decir, los representantes diplomáticos mexicanos y británicos en Washington, tomaron los hilos donde los había dejado Adams. Al final, el punto de conflicto se redujo a la negativa de México a tratar a Inglaterra de manera distinta a como se había tratado a los otros países europeos. Calles no estaba dispuesto a aceptar la creación de una comisión mixta general de reclamaciones para tratar los casos no contemplados por la comisión mixta especial. Sin embargo, el gobierno mexicano propuso que si esas reclamaciones que quedaban fuera de la comisión especial no se resolvían por los canales diplomáticos normales, entonces se podrían someter al arbitraje internacional. Este último punto lo logró el enviado especial británico a México en 1925: Sir F.H. Payne.

Al final de agosto de ese año de 1925, el Cónsul General británico en México fue nombrado Encargado de Negocios de Su Majestad y Alfonso de Rosenzweig Díaz ocupó el mismo sitio por parte de México en Londres. Para septiembre, se anunció que Esmond Ovey, un diplomático de carrera, sería el nuevo ministro británico en México, Ovey llegó a Veracruz en diciembre, para entonces Gilberto Valenzuela había sido nombrado ministro mexicano. Así, después de tres lustros, los británicos aceptaron la irreversibilidad de la Revolución Mexicana; después, y no antes, de haber hecho lo mismo con la revolución soviética.

La misión de Ovey tendría éxito, entre otras cosas, porque comprendió la naturaleza compleja y profunda de la Revolución Mexicana, y encontró el camino adecuado para presentar los intereses de Gran Bretaña en México como compatibles con los intereses de la nueva élite política mexicana. Después de todo, la Revolución Mexicana no era tan feroz como la habían pintado sus enemigos irreconciliables: Tower, Carden, Hohler o Cummins, cuya imagen del México aceptable era únicamente la del porfiriato o el huertismo, pero nunca la de la Revolución. En contraste, Ovey comprendió de inmediato la esencia del nuevo autoritarismo mexicano: populista, modernizante, y nacionalista, pero ese ya es el tema de aparte.

Al informar al rey sobre el reestablecimiento de las relaciones con México, la Foreign Office dio la mejor explicación que pudo de su recién adquirido "realismo" con respecto a México. Sin embargo, George V, a través de Lord Stamfordham, respondió de una manera no esperada por los diplomáticos de Su Majestad. En opinión del rey, "fue más bien el gobierno mexicano quien sacó la mejor parte de la lucha diplomática". El rey tuvo razón. □